

Santiago, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 20: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Luis Alberto Díaz Coñuecar, en representación de doña Marlys Maryorie Martínez Gutiérrez, don Alex Gabriel Palma Oyarce y doña Monserrat Antonia Parraguez Sepúlveda, demandantes en juicio laboral caratulado “Parraguez con Sociedad Marlys Martínez y Cia. Ltda.”, RIT O-10-2024, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Fernando, interpone recurso de queja en contra de los integrantes de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministros señores Jorge Fernández Stevenson, Miguel Ángel Santibáñez Artigas y abogado integrante señor Jaime Lobos Stephani, quienes, con fecha 25 de abril de 2025, confirmaron la resolución dictada en primera instancia con fecha 17 de junio de 2024, que declaró inadmisibles las demandas laborales, disponiendo no darle curso.

Expone que la resolución recurrida fue pronunciada con falta o abuso grave al privarlos del acceso a la justicia, derecho fundamental amparado en el artículo 19 N°3 y 76 de la Constitución Política de la República, al impedir el conocimiento de la acción sin un pronunciamiento sobre el fondo. Reprocha que el tribunal a quo —y posteriormente la Corte de Apelaciones— hayan fundado la inadmisibilidad en la supuesta identidad entre una de las demandantes, la señora Marlys Martínez, y la sociedad demandada Marlys Martínez y Cía. Ltda., por el solo hecho de que la primera ejerce la representación legal de la segunda, lo que, a su juicio, no constituye un impedimento procesal ni un vicio insubsanable. Añade que tal criterio no tiene sustento legal expreso y, además, afecta a los otros demandantes —Palma Oyarce y Parraguez Sepúlveda— quienes no tienen relación societaria ni representativa alguna con la persona jurídica cuestionada, por lo que la decisión de declarar inadmisibles todas las demandas deviene en arbitraria y desproporcionada.

Sostiene que en el ámbito del proceso civil patrimonial no existe la posibilidad de que el juez pueda y deba rechazar *ab initio* una demanda cuando carezca de total fundamento; que el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil lo faculta para no dar curso a la demanda cuando padezca de los requisitos previstos en cualquiera de los tres primeros numerales del artículo 254 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, es la ocurrencia de defectos formales los que autorizan al juez para negarse a dar trámite a una determinada pretensión, pero no las cuestiones que atañen al fondo del asunto, que sólo podrán verificarse al



final del proceso con la sentencia definitiva. Cuestiona que, además de no contar el tribunal con la facultad de declarar inadmisibile y no dar tramitación a la demanda, no se configura la hipótesis planteada por la magistratura, porque doña Marlys Martínez y la Empresa Marlyz Martínez y Cía Ltda no son la misma persona, por lo que no se aplicó correctamente lo dispuesto en los artículos 3° y 507 del Código del Trabajo; y además, se cumplen los requisitos del artículo 420 del citado código para tramitarla.

Por lo anterior, solicita se lo acoja, se invalide la resolución impugnada y se dicte la correspondiente de reemplazo que ordene conocer de la demanda.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que efectivamente dictaron la resolución impugnada con fecha 25 de abril de 2025, en causa Rol N° 343-2024. Sostienen que la resolución fue adoptada en atención a los antecedentes jurídicos expuestos en la audiencia, tanto por la parte demandante como por la demandada, y que se ajusta a derecho, en la medida que procura evitar eventuales nulidades posteriores derivadas del conflicto de interés entre la demandante y la representación de la parte demandada. Afirman que tal identidad podría generar ventajas procesales indebidas, con eventuales perjuicios para la codemandada, en especial en cuanto a los apercibimientos probatorios del procedimiento laboral que podrían eventualmente ser autoinducidos por la misma persona que detenta ambas calidades. Añaden que esta situación no resultaba corregible mediante la simple exclusión de la trabajadora cuya situación originaba el vicio, toda vez que la demanda fue interpuesta de forma conjunta y también incluía una acción subsidiaria en los mismos términos. De este modo, concluyen que la corrección de la tramitación fue una medida preventiva legítima, adoptada en resguardo del principio del debido proceso, y sin perjuicio del derecho que asiste a los demás actores a ejercer sus acciones en forma separada, en cuanto no se vean afectados por la incompatibilidad advertida.

Indican, finalmente, que no se ha producido afectación a las garantías procesales ni constitucionales invocadas, y que la resolución impugnada fue dictada precisamente para preservar la pureza del procedimiento y evitar nulidades ulteriores, en pleno respeto a los derechos de los trabajadores que no se encontraban involucrados en la situación de conflicto procesal descrita.

Tercero: Que, del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional, se advierte que:



1.- Con fecha 30 de enero de 2024 doña Marlys Maryorie Martínez Gutiérrez, don Alex Gabriel Palma Oyarce y doña Monserrat Antonia Parraguez Sepúlveda interpusieron demanda laboral en juicio especial de aplicación del artículo 507 del Código del Trabajo, deducida en contra de Bata Chile S.A. y Sociedad Marlys Martínez y Cía. Ltda., solicitando se declare la existencia de una relación laboral directa entre los actores y la primera de dichas empresas, alegando que la última habría utilizado a la segunda como interpuesta persona, en una situación de subterfugio, simulación y fraude laboral, a fin de desconocer la real calidad de empleador. En forma conjunta doña Marlys Martínez demandó reconocimiento de fuero maternal

Fundan su acción en que, pese a ser contratados formalmente por la sociedad codemandada, siempre se desempeñaron en dependencias y bajo subordinación directa de Bata Chile S.A., cumpliendo funciones propias del giro de dicha empresa, con elementos de propiedad de ésta, sin autonomía operativa ni financiera real por parte de la persona jurídica intermediaria. Agregan que, en el caso de la señora Martínez, si bien figura como representante legal de la sociedad intermediaria, también fue víctima del modelo de subcontratación fraudulento, debiendo asumir obligaciones y riesgos empresariales sin tener control ni beneficios reales del negocio.

2.- La demandada fue contestada únicamente por Bata Chile S.A., que solicitó su rechazo, negando la existencia de subordinación y dependencia respecto de los actores, y señalando que la empleadora era la empresa codemandada, jurídicamente autónoma y con la cual mantenían vínculo laboral formal y válido. Sostuvo, además, que no concurrían los requisitos del procedimiento especial previsto en el artículo 507 del Código del Trabajo, y que no existía simulación ni uso de una persona interpuesta.

3.- En audiencia preparatoria de 17 de junio de 2024 el Juzgado de Letras del Trabajo de San Fernando, en uso de las facultades del artículo 429 del Código del Trabajo, resolvió no dar curso a la demanda. Para ello, consideró que concurría un vicio formal grave, derivado de la circunstancia de que una de las demandantes, la señora Marlys Maryorie Martínez Gutiérrez, detentaba simultáneamente la calidad de socia mayoritaria y representante legal de la sociedad codemandada Marlys Martínez y Cía. Ltda., lo cual generaba una afectación insalvable al principio de bilateralidad de la audiencia y al debido proceso.



El tribunal estimó que dicha identidad de partes y de representación entre actora y demandada impedía la prosecución válida del juicio, razón por la cual, y, considerando además lo dispuesto en el artículo 430 del Código del Trabajo, hizo uso de la facultad prevista en el artículo 429 del mismo cuerpo legal, que autoriza al juez para adoptar, de oficio, medidas destinadas a corregir vicios de procedimiento que puedan conllevar nulidad procesal. Contra esta resolución, la parte demandante interpuso recurso de reposición, que fue rechazado.

4.- Con fecha 21 de junio de 2024 la parte demandante apeló de la resolución, siendo confirmada el 25 de abril de 2025, por la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Cuarto: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata *"De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales"*, y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de *"Las facultades disciplinarias"*.

Quinto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Sexto: Que, al efecto, es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir *"faltas o abusos graves"* cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la *"trascendencia"*, y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a un debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Séptimo: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que la magistratura recurrida -al decidir como lo hizo- haya incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte. En efecto, como puede advertirse, para confirmar la resolución apelada tuvieron en consideración los antecedentes a que se ha hecho referencia y la



normativa contenida en el Código del Trabajo; proceso racional que, precisamente, importa el ejercicio de las facultades privativas propias de la función judicial.

Octavo: Que, al respecto cabe señalar que, como ha dicho reiteradamente este tribunal, el proceso de interpretación de la ley que lleva a cabo la judicatura en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de aquella, salvo que se constate una violación evidente y manifiesta en dicha actividad, que por su entidad y arbitrariedad, configure una falta o abuso que deba ser enmendada, cuestión que, en la especie, no concurre, por cuanto dicha magistratura se limitó a argumentar en torno al conflicto sometido a su consideración, arribando a conclusiones jurídicas que, en lo esencial, se enmarcan dentro de criterios de racionalidad propios del ejercicio de la jurisdicción, por lo que el presente arbitrio, constituye, en definitiva, una mera expresión de la disconformidad de la parte recurrente, que, como se ha dicho, no es controlable por esta vía.

Noveno: Que, en ese contexto, y atendida la jurisprudencia de esta Corte referida al recurso de queja, se debe concluir que la magistratura recurrida no incurrió en falta o abuso grave susceptible de ser enmendada por la vía disciplinaria, por lo que el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza** el recurso de queja deducido en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministros señor Jorge Fernández Stevenson, señor Ángel Santibáñez Artigas y abogado integrante, señor Jaime Lobos Stephani.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 14.973-2025.-





Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Gloria Chevesich R., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a dieciocho de junio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

